



## GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

### Sentencia TFABA

**Número:**

**Referencia:** Corresponde expte nro 2360-0174210/2014 -- "AIRES CUNHA VALENTIN".

---

**AUTOS Y VISTOS:** el expediente número 2360-0174210/2014, caratulado "AIRES CUNHA VALENTIN".

**Y RESULTANDO:** Que llegan a esta instancia las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 1/2 del Alcance 1, agregado como fs. 40, por la Sra. Silvia Nora González, por su propio derecho, con el patrocinio letrado del Dr. Omar Oscar Purón (fs. 43), contra la Disposición Delegada SEFSC Nº 202D000012/2014, dictada con fecha 18 de noviembre de 2014 por la Subgerencia de Coordinación Regional Trenque Lauquen de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.

El acto administrativo aludido, obrante a fs. 33/36, denegó el beneficio de exención de pago del Impuesto a los Automotores, previsto en el artículo 243 inciso f) del Código Fiscal (texto según Ley Nº 14553), solicitado por la ahora apelante respecto del vehículo dominio MCF-752.

A fojas 41 la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, le requiere al recurrente que en el plazo de diez (10) días hábiles presente escrito manifestando expresamente la vía recursiva intentada (Apelación o Reconsideración), bajo apercibimiento de entenderse que ha optado por el Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de conformidad a lo dispuesto en el artículo 104 del Código Fiscal T.O. 2004 (artículo 115 T.O. 2011).

A fojas 43 la recurrente elige la vía del recurso de apelación y en orden a ello, a fojas 47 el Departamento Representación Fiscal elevó las actuaciones a esta instancia, conforme

lo establecido en el artículo 121 del Código Fiscal, mientras que a fs. 49 se adjudica la causa para su instrucción a la Vocalía de la 4ta Nominación, haciéndose saber que conocerá en la misma la Sala II.

A fs. 50, se le intimó a la apelante la acreditación del pago de la contribución y el anticipo previsional vigentes (arts. 12 inc. g) “in fine” y 13 de la ley 6716 (T.O. Decreto/Ley 4771/95), bajo apercibimiento de declarar firme el acto apelado y comunicar el incumplimiento a la Caja Profesional respectiva, requerimiento que se tiene por cumplimentado con el escrito obrante a fojas 53/54.

A fs. 55 se da traslado del recurso articulado a la Representación Fiscal por el termino de quince (15) días, para que conteste agravios y, en su caso, oponga excepciones (artículo 122 del Código Fiscal), obrando a fs. 56/57 el escrito de responde.

A fs. 60/63, se anexan por Secretaría constancias registrales de la base de teleprocesamiento de datos de la Agencia de Recaudación, vinculados a la titularidad actual del vehículo de marras y la existencia de otros procedimientos relacionados al beneficio en discusión.

Finalmente, mediante providencia de fs. 64, se hace saber que la Sala II se encuentra integrada con el Dr Ángel Carlos Carballal, en carácter de Vocal subrogante (conforme Acuerdo Extraordinario N° 100/22), conjuntamente con el Cr Rodolfo Dámaso Crespi, Vocal de la 6ta Nominación y la Dra Irma Gladys Ñancufil en carácter de conjueza (conforme Acuerdo Ordinario N° 61/23, Acuerdo Extraordinario N° 102/22 y Acta N° 14/24). Por último, atendiendo al estado de las actuaciones, se dicta el llamado de autos para sentencia (artículos 124, 126 y 127 del Código Fiscal).

**Y CONSIDERANDO:** Que en el recurso en análisis, la apelante cuestiona en primer término que la negativa del Fisco se sustente únicamente en la falta de coincidencia del código de discapacidad que surge del Certificado Único de Discapacidad de su hijo Valentín Aires Cunha y el que exige el artículo 536 de la Disposición Normativa Serie “B” N° 1/2004 y sus modificatorias, sin que haya realizado un análisis previo de la situación que da motivo al pedido.

Al mismo tiempo objeta la decisión del Fisco al expresar que la Agencia le ha otorgado anteriormente una exención de este impuesto mediando idénticas circunstancias y antecedentes con los que ahora fundamenta la denegatoria del beneficio.

Alega que habitar en la localidad de Casbas, un pueblo de 4.000 habitantes, implica una limitación en el acceso al acompañamiento terapéutico que su hijo necesita y es brindado en las ciudades de Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Coronel Suárez.

Afirma que para concurrir a esos centros de atención necesitan utilizar el vehículo

familiar, dada la necesidad de su hijo Valentín de ir acompañado, el deficitario servicio de transporte público y la alteración de la organización familiar que implica la utilización del servicio de traslado que brinda la Municipalidad de Casbas, por su falta de adecuación de sus horarios a los de atención de médicos o terapeutas.

Por otra parte agrega que si los viajes necesarios no se hicieran en el vehículo propio, permitiendo a su hijo acceder a una mejor calidad de vida, sería un ciudadano de segunda al que se le vedarían derechos constitucionales básicos garantizados por los artículos 14, 20 inc. 2, 35, 56 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Sostiene que el derecho a la salud está consagrado en nuestra Carta Magna, y al introducirse en nuestro ordenamiento jurídico tratados internacionales adquirió rango constitucional.

Concluye su presentación postulando que la denegación de la exención, más que un perjuicio a la titular del automotor implica privar a su hijo con discapacidad de un recurso que permite realizar su tratamiento médico y de rehabilitación e implica ser cómplice de la ausencia del Estado en materia de salud.

Por último, hace reserva del caso federal.

**II.-** La Representación Fiscal inicia su réplica con la cita del marco normativo aplicable, artículo 243 inciso f) del Código Fiscal y explica que en su reglamentación -artículo 536 y siguientes de la Disposición Normativa Serie "B" N° 1/04 (modificada por sus similares N° 43/06 y 80/08 y la Resolución Normativa N° 47/12)- se especifican los requisitos a acreditarse para la procedencia de la dispensa, mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad que contenga el código de discapacidad "d 4702", con los calificadores 33, 34, 43 o 44. Aclara que dicho instrumento se encuentra regulado por el art. 3 de la Ley N° 22.431, en su redacción establecida por la Ley 25.504 (modelo aprobado por la Resolución N° 675/09 del Ministerio de Salud de la Nación)

Seguidamente detalla el alcance de dicha certificación y concluye que no quedan reunidos los extremos exigidos por la norma para hacer procedente la exención, siendo por tal motivo ajustada a derecho la denegatoria dictada.

Seguidamente rebate la argumentación referida a que anteriormente la Agencia otorgó una exención similar, afirmando que esa circunstancia no es vinculante para la Autoridad de Aplicación, máxime si la posterior solicitud es evaluada a la luz de la nueva redacción del artículo 220 inciso f) del Código Fiscal (T.O. 2004, artículo 243 del T.O. 2011), vigente a partir del 1° de enero de 2006.

Por último, en la conclusión de su réplica, la Representación Fiscal expresa que en

materia tributaria, el poder de gravar en manos del estado presenta como contracara la potestad de eximir o desgravar, situación que conlleva a quien tiene la facultad de otorgar la exención, a actuar observando estrictamente lo dispuesto por la norma, sin que pueda el juez administrativo a través de su interpretación, sustituir al legislador. Cita jurisprudencia.

Por lo expuesto solicita se confirme el acto impugnado y se tenga presente el Caso Federal para el momento procesal oportuno.

**III.- Voto del Dr. Angel Carlos Carballal:** Que, tal como ha quedado delineada la cuestión, corresponde resolver si se ajusta a derecho la Disposición Delegada SEFSC N° 202D0000122014, en cuanto denegó el pago del impuesto automotor previsto en el artículo 243 inciso f) del Código Fiscal, solicitado por la Sra. Silvia Nora Gonzalez respecto del automotor dominio MCF-752.

Sobre el punto observo que el argumento principal del rechazo a la exención solicitada, es de corte meramente formal y se circunscribe a la falta de coincidencia de los códigos de discapacidad que surge del CUD y el requerido por la reglamentación del artículo 243 del Código Fiscal (Resolución Normativa Serie "B" N° 47/12, que modificó la Disposición Normativa Serie "B" N° 01/04).

Sobre el punto advierto que la crítica del Organismo Fiscal -y en la cual se funda enteramente la denegatoria- no reside en la falta de acreditación de la discapacidad invocada, o la falta de dificultad para el uso del transporte público, sino que únicamente cuestiona la ausencia del código nomenclador requerido por la norma reglamentaria. Y si bien es indudable que la coincidencia de nomencladores sería una acreditación irrefutable de la procedencia del beneficio previsto por la norma, más claro deviene el hecho de que en ningún lado se dispone que otro código o descripción pueda generar la misma consecuencia.

Que liminarmente debe recordarse que el artículo 538 de la Disposición Normativa Serie "B" N° 1/04 -en lo que aquí interesa- faculta a la Autoridad de Aplicación a *"...ponderar otros elementos de valoración, requerir del interesado otra documentación que estime pertinente, y recabar la opinión de los organismos nacionales o provinciales competentes en materia de salud y/o discapacidad, a los fines de resolver sobre la procedencia de la exención, reservándose en todos los casos la facultad de verificación conforme lo dispuesto en el Código Fiscal."*

Como puede observarse, el decisorio no debe ceñirse sólo a un mero cotejo de códigos de discapacidad, sino que muy por el contrario y haciendo uso de las herramientas que brindan el citado artículo 538 ponderar otros elementos de valoración que permitan al juez administrativo compatibilizar y armonizar los intereses en pugna para arribar a una

solución que evite el menoscabo de derechos, garantías fundamentales y principios humanitarios de integración, procurando arribar a la “justicia” en el caso concreto, tal como resolvió este Tribunal -entre otros- en autos "CORDOBA MARCOS MAURICIO" -sentencia de Sala I del 20/03/2013, registro 1768.

Que de tal forma, “...Las normas que establecen exenciones no deben interpretarse con el alcance más restringido que el texto admite, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia...” (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en autos “Edesur S.A. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Bs. As. s/ acción meramente declarativa”. E. 213. XXXVII. REX. Sentencia del 08/08/2006. Fallos: 329:2975. En similar sentido decidió en autos “Club 20 de Febrero c/ Estado Nacional y/o AFIP”, Sentencia de fecha 29 de septiembre de 2006, entre muchas otras).

Que aclarado lo anterior, puede advertirse que el documento acompañado por el solicitante a fs. 10 es una certificación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, emitido en los términos del artículo 3° de la Ley 22.431. En el mismo se diagnostica que Valentín Aires Cunha (hijo de la apelante, según surge de fs. 13), nacido el 20/07/2011, padece de “Síndrome de Down”. Respecto de la necesidad de cobertura del acompañante, se consigna “SI” en el cuadro específico.

Remarco, por último, que dicho certificado fue expedido en la fecha 15/10/2014 por la Junta Evaluadora de Discapacidad de Guaminí, con validez hasta el 08/10/2024. Y en cuanto a la codificación tan evaluada esta Junta otorga la siguiente: “b1600.3 b117.3 b21000.2 b3300.3 b1140.2 s110.388 d160.23 d220.23 d720.23 d163.23 d860.23 d330.23 d345.23 d6200.23 d2302.23 d150.33 d 870.33 d3501.23 e310.+3 e320.+3 e5801.+3 e1101.+3 e360.+3”. No se expresan los códigos “d4702. 33, 34, 43 ó 44”.

Llegado a este punto advierto que tanto la recurrente como su hijo residen en la localidad de Casbas (fs. 11), partido de Guaminí. No ha desconocido la Representación Fiscal que Valentín Aires Cunha reciba tratamiento de rehabilitación para su discapacidad en la ciudad de Trenque Lauquen (v. fs. 14/15), ni la dificultad para acceder a los servicios de transporte en Casbas que alega la apelante.

Por ello, entiendo oportuno transcribir el artículo 243 del Código Fiscal vigente al momento de dictarse el acto apelado, el cual reza, en su parte pertinente, que estarán exentos: “...f) Los vehículos nuevos o usados, destinados al uso exclusivo de personas que padezcan una discapacidad tal que les dificulte su movilidad, impidiéndoles o entorpeciendo severamente el uso de transporte colectivo de pasajeros, y que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requieran la utilización de

*un automotor; conducidos por las mismas, salvo en aquellos casos en los que, por la naturaleza y grado de la discapacidad, o por tratarse de un menor de edad discapacitado, la autoridad competente autorice el manejo del automotor por un tercero...Se reconocerá el beneficio por una única unidad, cuando la misma esté a nombre del discapacitado o afectada a su servicio; en este último caso el titular deberá ser el cónyuge...o la pareja conviviente cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos años mediante información sumaria judicial...”.*

Se concluye, pues, que la pauta hermenéutica que brinda la ley para decidir el otorgamiento de una exención, es el grado de dificultad en la movilidad, evidenciado en el impedimento o entorpecimiento en el uso del transporte público, o en el hecho de depender del uso de un automotor para la integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa.

Que de todo lo hasta aquí expuesto, resulta claro que no se encuentra en discusión la discapacidad del hijo de la solicitante, o su necesidad de uso de un automotor para su mejor integración educacional, social o de salud y recreativa. En efecto, el thema decidendum radica en determinar si la sola ausencia de consignación del código específicamente requerido por la norma reglamentaria, justifica el rechazo de la exención requerida.

Que soy de la opinión que el operador del derecho no está llamado a realizar una aplicación automática del derecho vigente, sino que le corresponde al intérprete encontrar los valores que el Derecho persigue, en la medida que las normas poseen un contenido axiológico. Así, debe destacarse que en el orden nacional existe un Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social, así como a concederles las franquicias y estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que su discapacidad les provoca, y tender a la igualdad de oportunidades (art. 1° de la Ley N° 22.431). Por otra parte, a través de la Ley N° 26.378 se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el artículo 1° de su Anexo estatuye que es su propósito “...promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” como asimismo promover su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. De la misma manera en la órbita provincial se erigió un sistema similar al nacional mediante la sanción de la Ley N° 10.592, por la que se instituye “...un régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas. El Estado provincial asegurará los servicios de atención médica, educativa y de seguridad social a los discapacitados en imposibilidad de obtenerlos. Asimismo, brindará los beneficios y estímulos que permitan neutralizar su discapacidad,

*teniendo en cuenta la situación psico-física, económica y social, y procurará eliminar las desventajas que impidan una adecuada integración familiar, social, cultural, económica, educativa y laboral” (art. 1°). Entre los fundamentos de esta ley se destaca que “La provincia de Buenos Aires no ignora que las personas discapacitadas son titulares de los mismos derechos fundamentales, como ciudadanos, que los demás integrantes de la sociedad. Tiene asimismo plena conciencia de que el principio de igualdad ante la ley consagrado constitucionalmente no puede quedar sólo en la letra, sino que debe instrumentarse en forma efectiva para que los ciudadanos discapacitados no encuentren que la comunidad, por acción o por omisión, les niegue las posibilidades y responsabilidades que sin duda alguna les corresponden”.*

Ahora bien, en estos actuados se acreditó la discapacidad del hijo de la apelante y su necesidad de viajar con acompañante y realizar -como mínimo- tratamientos de rehabilitación en una ciudad que dista cien (100) kilómetros de su actual domicilio, ello con el fin de lograr su integración educacional, social, recreativa y de salud. Desconocer estas circunstancias significa una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, en palabras de la Corte incompatible con un correcto servicio de justicia, amén de soslayar el efectivo cumplimiento de los requisitos requeridos en la ley fiscal.

Que dicha postura entiendo, resulta avalada por la Ley N° 14.880 (vigente desde el 1° de enero de 2017), la cual ha sustituido el texto del mencionado artículo 243 del Código Fiscal en su inciso f), disponiendo actualmente la dispensa a: *“Los vehículos destinados al uso exclusivo de personas que padezcan una discapacidad y acrediten su existencia mediante certificaciones extendidas conforme la Ley N° 10.592 (complementarias y modificatorias), la Ley Nacional N° 22.431 (complementarias y modificatorias) o la legislación que las reemplace; o demuestren que se encuentren comprendidos en los beneficios establecidos en la Ley N° 19.279, conforme artículo 1° del Decreto N° 1.313 (y su reglamentación); que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requieran la utilización de un automotor...”*. Claramente surge la voluntad legislativa (acorde al criterio y sostenido en este voto) de abarcar con la exención a los discapacitados, atendiendo a su condición subjetiva, desprovista de la tipificación de su capacidad por grado o incidencia en su movilidad. En idéntico sentido he tenido oportunidad de expresarme en autos “DE MONTE CARLA MARIA”, Sentencia de Sala I del 5 de septiembre de 2017, Registro 2073 y “GULLO ALAN PATRICIO”, Sentencia de Sala II del 8 de febrero de 2022, Registro 3156.

Que por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, reconociendo la exención de pago del Impuesto a los Automotores sobre el vehículo identificado con el dominio MCF 752, propiedad de la apelante, madre de Valentín Aires Cunha, conforme acreditan las constancias de autos, lo que así declaro.

Cabe destacar, paralelamente, que atento al tiempo transcurrido y las particularidades

procesales de la cuestión bajo análisis, han de evaluarse la existencia de otros procedimientos que involucren el beneficio analizado y la titularidad sobre el automotor involucrado en autos.

**POR ELLO, VOTO: 1°)** Hacer lugar al recurso articulado a fs. 1/2 del Alcance 1, agregado como fs. 40, por la Sra. Silvia Nora González, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Omar Oscar Purón, contra la Disposición Delegada SEFSC N° 202D000012/2014, dictada con fecha 18 de noviembre de 2014 por la Subgerencia de Coordinación Regional Trenque Lauquen de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. **2°)** Revocar el artículo 1° de la Disposición aludida, reconociendo el beneficio de exención de pago del Impuesto a los Automotores en relación al vehículo identificado con el dominio MCF 752, desde el 15 de octubre de 2014 y hasta que por derecho corresponda, de acuerdo a lo expuesto en el Considerando III del presente. **3°)** Regístrese, notifíquese y devuélvase.

**Voto del Cr Rodolfo Dámaso Crespi:** Adhiero al voto del Dr Angel Carlos Carballal.

**Voto de la Dra Irma Gladys Nancuñil:** Que, en virtud de los fundamentos vertidos en su voto por el Dr. Ángel Carlos Carballal, adhiero, dejándolo así expresado.-

**POR ELLO, SE RESUELVE:** **1°)** Hacer lugar al recurso articulado a fs. 1/2 del Alcance 1, agregado como fs. 40, por la Sra. Silvia Nora González, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Omar Oscar Purón, contra la Disposición Delegada SEFSC N° 202D000012/2014, dictada con fecha 18 de noviembre de 2014 por la Subgerencia de Coordinación Regional Trenque Lauquen de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. **2°)** Revocar el artículo 1° de la Disposición aludida, reconociendo el beneficio de exención de pago del Impuesto a los Automotores en relación al vehículo identificado con el dominio MCF 752, desde el 15 de octubre de 2014 y hasta que por derecho corresponda, de acuerdo a lo expuesto en el Considerando III del presente. **3°)** Regístrese, notifíquese y devuélvase.







**GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

2024 - Año del 75° Aniversario de la gratuidad universitaria en la República Argentina

**Providencia**

**Número:**

**Referencia:** Corresponde al Expte N°2360-174210/14 "AIRES CUNHA VALENTIN"

---

Se deja constancia que la sentencia dictada bajo GEDO INLEG-2024-17846162-GDEBA-TFA, ha sido firmada conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Extraordinario N° 96/20 y registrada en esta Sala II bajo el N° 3491.-